

# ECONOMÍA POLÍTICA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

**Pablo Dávalos**

Economista - Profesor de Macroeconomía, PUCE, Facultad de Economía - Coordinador de investigación de CLACSO

## Introducción

Tiempos contradictorios: equívocos: ambiguos. Hay una densa bruma que cubre los discursos políticos, la praxis social, el pensamiento crítico. En Ecuador de ahora, apenas a varios meses de las movilizaciones indígenas en contra del Tratado de Libre Comercio con EEUU, y la salida de la empresa norteamericana Oxy, y una vez resuelto el enigma electoral con el triunfo de Alianza País y su candidato, Rafael Correa, el debate sobre la Asamblea Constituyente copa los espacios de la política.

Ahora bien, se trata de un debate encarnizado en los “cómo”, pero no en los “porqué” y “para qué”. Una discusión centrada en los procedimientos y en las formas; y un olvido casi absoluto sobre contenidos y propuestas de fondo, sobre todo de aquellos que hacen referencia al modelo económico. La sociedad entera se disfraza de simulacro y la política se convierte en un juego de manos.

¿Cómo se llegó a este escenario? ¿Qué procesos políticos, económicos y sociales son inherentes a la Asamblea Constituyente del 2007? ¿Cuáles son los sujetos históricos de esta coyuntura? De entrada, hay que situar el contexto de esta Asamblea Constituyente, y ese contexto se refiere al agotamiento del modelo neoliberal y del sistema político que procesó las reformas liberales, y al desgaste político de la clase obrera ecuatoriana y del movimiento indígena; pero también hay que resaltar la emergencia de una poderosa clase media surgida al tenor de la dolarización de la economía, y de las remesas de los emigrantes, una clase media que se convierte en sujeto político y que le otorga coherencia y racionalidad al proceso de la Asamblea Constituyente.

Cada sujeto histórico moldea las resistencias, las movilizaciones, el ejercicio del poder o del contrapoder, desde sus posibilidades históricas y desde su capacidad de criticar y proponer alternativas. La clase obrera, quizá el sujeto político más importante del capitalismo, tuvo un proceso de constitución relativamente largo, y planteó su crítica al sistema capitalista desde la explotación del trabajo, y a partir de esa crítica propuso la emancipación del trabajo en la sociedad socialista, en la que los obreros puedan poseer las condiciones de la producción y se elimine la explotación al trabajo. El trabajo se convertía en la parusía de la libertad.

El movimiento indígena, de su parte, y que insurge como sujeto político en los años noventa, en pleno auge neoliberal, plantea una crítica más que al capitalismo a la modernidad. Le acusa de borrar las diferencias y construir un modelo de Estado y sociedad que discrimina a la diferencia y que se sustenta en la violencia. Si se quiere ver desde una perspectiva más amplia, la propuesta de Estado Plurinacional de los

movimientos indígenas, tendría el mismo espesor ideológico, político y emancipatorio que aquella del socialismo de la clase obrera.

Sin embargo, esos tiempos en los que la discusión tenía espesura ideológica, al parecer, están por concluir. Ahora el debate sobre la Asamblea Constituyente, viene de la mano de los denominados movimientos ciudadanos, que critican al sistema político pero no por explotador o discriminatorio, sino por corrupto e inmoral! Una crítica, válida por supuesto, a condición que retome aquel camino recorrido en su tiempo por la clase obrera y por el movimiento indígena, en el que la crítica al sistema era condición necesaria para el cambio social.

Empero de ello, el movimiento ciudadano que ahora presiona por la Asamblea Constituyente tiene la pretensión de considerarse un movimiento fundacional de la política. Para ello anula el pasado para perpetuar el presente. Su apuesta está más en la reconstitución del orden y del poder, que en la superación de éste. El movimiento ciudadano, al hacer tabula rasa de la rica tradición de movilización y resistencia en el Ecuador, y al situar sus propuestas dentro del esquema del liberalismo clásico, en realidad, cierra el campo de posibles históricos y se constituye, a la larga, en un movimiento conservador, empero de ello, su emergencia política provoca la paradoja de que suscita cambios en las relaciones de poder, más como efectos indeseados que como propuesta política real.

El presente trabajo intenta explorar aquellos caminos que han conducido a la emergencia de los movimientos ciudadanos y su propuesta de Asamblea Constituyente. El telón de fondo sobre el cual se sitúa la lucha política en el Ecuador, está constituido por la matriz teórica, normativa y epistemológica del liberalismo. De ahí que las principales propuestas de estos movimientos ciudadanos, nada tengan que ver con las demandas del socialismo y el fin de la explotación laboral de la clase obrera, ni tampoco con aquellas del Estado Plurinacional y el fin de la violencia y discriminación a la alteridad, propuesta por el movimiento indígena, sino con la reformulación del Estado liberal clásico a través de la consolidación del “Estado social de derecho” y la “economía social de mercado”.

### **La crisis del sistema político ecuatoriano**

Uno de los *leit motiv* para la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente hace referencia al desgaste y agotamiento, al parecer definitivo, del sistema político. Efectivamente, el contexto político en el Ecuador da cuenta de que el sistema político que se diseñó y se puso en ejecución en 1979, finalmente caducó y es necesario reemplazarlo. Ahora bien, no se reemplaza a un sistema político si no existen los grupos de poder que asuman las tareas políticas de la renovación de los discursos, las prácticas y las nuevas instituciones que reemplacen a las anteriores.

Ecuador parece haber llegado a ese punto en el que el sistema político agoniza y emergen los nuevos actores políticos que reclaman un sitio en la historia. Sin embargo, las estructuras de poder que de una u otra manera se procesan en el sistema político, en lo fundamental no han cambiado. Es decir, existen nuevas elites económicas y políticas que reclaman más poder político, pero el sustrato de explotación, discriminación y violencia pervive.

Desde el retorno de la democracia, el sistema político ha sido el responsable de procesar las reformas neoliberales, cerrando el sistema político a la presión social a través del fortalecimiento del régimen político presidencialista, en el que la figura del Presidente de la República se convierte en jefe de Estado y jefe de gobierno al mismo tiempo, con amplios poderes discrecionales. El presidencialismo permitió que muchas de las reformas neoliberales, como por ejemplo las políticas de shock, las privatizaciones, el aperturismo comercial, la desregulación, etc., se procesen directamente desde el ejecutivo.

El presidencialismo bloqueó de manera eficaz las presiones sociales y las resistencias populares a toda reforma política que impida o retarde la aplicación del modelo neoliberal. Este compromiso por el neoliberalismo terminó desgastando a la institucionalidad, al Estado, e incluso a la democracia.

Fue ese desgaste, el que provocó la presión para que se convoque a una Asamblea Constituyente en 1997-98. Cuando finalmente se convocó, se produjo la paradoja de haber aprobado uno de los textos constitucionales más neoliberales en un contexto de amplia movilización social.

En efecto, en 1998 el Ecuador aprobó su 19ª. Constitución Política, previo a un proceso de convocatoria y elección de una Asamblea Constituyente. Es precisamente esta última Carta Constitucional la que por vez primera en toda la historia republicana reconoce la ciudadanía a los analfabetos, que en el Ecuador son mayoritariamente indígenas, además de reconocer los derechos colectivos, y, al mismo tiempo, consolida una serie de disposiciones que facilitan la privatización y la desregulación estatal, y consolidan el esquema neoliberal bajo la figura de la “economía social de mercado”, como contraparte y correlato del “Estado social de derecho” liberal.

El diseño jurídico, político, económico, social e institucional de esta Constitución apenas aprobado se agotó, porque mantuvo intacto al sistema político y a la institucionalidad que le es correlativa. En ese momento, las elites aprovecharon su control del sistema político para confiscar la movilización social en beneficio propio y radicalizar las reformas neoliberales.

Esa estrategia de las elites tuvo como pivote de sustentación al discurso de la gobernabilidad, que generó un consenso social sobre la necesidad de otorgar mayor margen de maniobra al ejecutivo ante la necesidad de imponer la reforma estructural de carácter neoliberal.

Apenas a meses de aprobada esta nueva Carta Constitucional, estalla la crisis bancaria y la clase media es golpeada de manera directa por un feriado bancario. Para la clase media este será uno de sus peores momentos y jamás perdonará a los partidos políticos que la llevaron a esa crisis. El sistema político había colapsado conjuntamente con los bancos y con la moneda nacional, pero habrían de pasar algunos años hasta que se compruebe de manera definitiva el colapso de ese sistema político.

Mas, ¿cómo se llegó a la crisis financiera y monetaria de 1999? ¿Qué relación existe entre esa crisis y el sistema político? ¿Tienen razón las clases medias para acusar al sistema político de la peor crisis de su historia? Para comprender ese agotamiento del sistema político y su relación con la crisis de 1999, es necesario comprender la dinámica

del modelo neoliberal, expresado en las políticas de ajuste y estabilización, porque sobre ese modelo se sitúan las condiciones de posibilidad de las clases medias que ahora reclaman un nuevo diseño político.

### **Políticas de ajuste y crisis económica: los dilemas de la economía y la democracia**

Por contradicciones de la historia, el sistema político que fue creado por la dictadura de 1979, tuvo que procesar apenas tres años después de constituido la reforma neoliberal y el desmantelamiento de la institucionalidad pública que sostenía un modelo de crecimiento y desarrollo centrado en el Estado, en la planificación social y en la inversión pública.

Vale decir que el Ecuador empieza a transitar en la ruta neoliberal en el momento preciso en el que había resuelto los problemas de la modernización política generando un sistema político coherente con la emergencia de las nuevas elites políticas que pudiesen llevar adelante las tareas de la industrialización, la inversión pública y la planificación estatal.

En efecto, el mes de marzo de 1983, el Ecuador firma su primera Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en virtud de la cual se compromete a un esquema de devaluación de la moneda nacional, de incremento de los precios de los combustibles, de incrementos en la tributación indirecta, de disminución del gasto público y del inicio de un programa de privatizaciones. Esa carta de intención con el FMI era la partida de defunción de un modelo de industrialización y crecimiento endógeno.

Efectivamente, las políticas de ajuste impuestas por el FMI clausuran el ámbito de una política económica en función de intereses de una burguesía nacionalizante, y adscriben las definiciones en el ámbito de la política económica a las decisiones de la banca multilateral.

A partir de ese año, la presencia del FMI y del Banco Mundial será constante. El Ecuador, durante la “larga noche neoliberal”, ha suscrito once Cartas de Intención con el FMI y dos Acuerdos de Asistencia Estratégica al País con el Banco Mundial. El Ecuador, gracias a las reformas impuestas por las condicionalidades del FMI y del Banco Mundial, se convirtió en exportador neto de capitales, reforzando su economía primario-exportadora, limitando la actividad estatal y provocando pobreza y fragmentación social.

El FMI y el Banco Mundial, provocan cambios fuertes en la orientación de la política económica, que afectan directamente a la capacidad adquisitiva de los hogares, al empleo de los trabajadores, a las posibilidades de intervención pública en los ámbitos de salud, educación y bienestar social. Toda la política económica gira alrededor del pago de la deuda externa y en el desmantelamiento del Estado. El sistema político, es decir, los partidos políticos que lo conforman y que incluyen hasta partidos de centro izquierda, como la Izquierda Democrática, asumen la responsabilidad de procesar esas reformas neoliberales y asumen el costo político que ello implica.

El endeudamiento externo se convierte no solo en un fenómeno económico sino en un problema político. La deuda externa es el pivote de las nuevas relaciones de

subordinación al sistema mundo capitalista. Gracias al mecanismo de la deuda se transmiten los costos de la acumulación mundial del centro a la periferia. Esa transferencia se procesa al interior de los países de la periferia, precisamente, desde el sistema político.

Es por ello que el sistema político se concentra en construir consensos y administrar disensos alrededor de la idea de la necesidad del ajuste y de la reforma estructural, que garanticen el pago de la deuda externa, el desmantelamiento del Estado, y la consolidación del poder financiero.

Para hacerlo, el sistema político cuenta con un gran aliado: los medios de comunicación. Esa connivencia entre medios de comunicación, sistema político y elites económicas y financieras, conjuntamente con el FMI y el Banco Mundial, fueron configurando un escenario de beligerancia política en la que se criminalizó la resistencia social al neoliberalismo, pero también significó el desgaste institucional, el debilitamiento de los partidos políticos y, finalmente, la pérdida de referentes sociales con respecto a la democracia, a las elecciones y los partidos políticos.

En efecto, la población a nivel electoral era, y es, muy susceptible a los discursos críticos con el neoliberalismo, pero al mismo tiempo, es muy sensible con el discurso de la crisis. Los medios de comunicación, a través de la manipulación del discurso de la crisis, se encargaron de generar una tensa situación social en la que el miedo se convertía en recurso político de desmovilización y control social: miedo a la crisis, miedo al desempleo, miedo a la pobreza, miedo al futuro. Un temor que paralizaba la capacidad social de movilización y resistencia. Que vulneraba las solidaridades y que adscribía los consensos alrededor de la necesidad del ajuste fondomonetarista como única opción de salida.

Al mismo tiempo que los medios de comunicación generaban ese miedo, procesaban las respuestas reforzando el modelo neoliberal; creando consensos alrededor del sistema político que asumía los costos de la administración del modelo neoliberal como naturales y necesarios. En otras palabras, naturalizaban la crisis y amenazaban con crisis peores si no se adoptaba el recetario neoliberal.

Uno de los recursos utilizados en esta estrategia de lo numinoso fue la inflación. Si bien la inflación se manifiesta como un fenómeno económico y vinculado a la capacidad adquisitiva del salario, en la estrategia de control y dominación, la inflación se convirtió en realidad en un recurso político del poder financiero. Gracias a ese recurso el capital financiero pudo cambiar la geometría del poder y desarticular las resistencias. La inflación, además, permitía la transferencia de los costos de la crisis desde el centro del sistema mundo hacia la periferia. Recurso perfecto que naturalizaba las intervenciones del FMI, como propuestas necesarias. Pero eran esas intervenciones, eran esas medidas económicas que el FMI imponía las que generaban inflación.

El ajuste macroeconómico, con las medidas de shock que significaron la pérdida de empleos, ingresos y la concentración del poder, transformó de manera definitiva a la democracia y al sistema político. Demostró que la democracia liberal puede convertirse en un dispositivo político eficaz cuando la institucionalidad política se encarga de gravitar alrededor de la necesidad de la estabilización y el control de la inflación.

En poco tiempo, desapareció del horizonte de posibilidades las prioridades del empleo, del bienestar, del sentido de lo público. La necesidad de controlar la inflación fue destrozando la institucionalidad del Estado, porque se transfirió a lo público la responsabilidad de la inflación. Se dijo que era la irresponsabilidad del gasto estatal la que provocaba la inflación, de tal manera que los procesos políticos fueron encubiertos por un discurso vacío de contenidos políticos, vale decir, el discurso de la economía.

La estabilidad fiscal fue, entonces, el nuevo deber-ser de las políticas económicas. Para lograr esa estabilidad, condición previa para evitar la crisis, el Estado tenía que disciplinarse. En pocos años, se desmanteló la capacidad institucional del Estado para definir y defender los intereses públicos.

En todo este proceso, el rol del sistema político, es decir, los partidos políticos, la clase política, las elecciones, las instituciones electorales, fueron determinantes. Sin su apoyo cómplice la demolición del Estado habría sido imposible. Pero en un ejercicio de una razón cínica, el sistema político para legitimar y cumplir con las tareas del modelo neoliberal, no dudaba en criticar y cuestionar al neoliberalismo, sobre todo en los tiempos electorales.

Los candidatos en época electoral, se revelaban duros e implacables con el modelo neoliberal y con las oligarquías que se beneficiaban de ese modelo neoliberal, y prometían al mismo tiempo la modernización social y la redención de los pobres. Ahora bien, una vez ganadas las elecciones y ser gobierno, aprovechaban de su popularidad para administrar políticas de shock que incluían disminuciones de los salarios, elevaciones de los impuestos, supresión de subsidios, eliminación de empleos, mayores costos para los servicios públicos, etc. El discurso de la crisis se reveló eficaz para administrar los disensos y para crear la ilusión de que las medidas neoliberales eran por el bien social.

Esto fue marcando distancias con el discurso político, sobre todo aquel discurso electoral, las instituciones políticas, los partidos políticos y el sistema democrático. En el Ecuador, ningún partido que ha ganado las elecciones para la presidencia de la república, ha sido reelecto\*.

La democracia liberal, en efecto, nunca resolvió los problemas económicos de la mayoría de la población, todo lo contrario, los agravó. Conforme se sucedían los gobiernos democráticos, la situación económica de la población se deterioraba.

De otra parte, es de indicar que los gobiernos creaban, de la mano del Banco Mundial, programas de atención y focalización de la pobreza, para evitar que ese desgaste de la democracia altere el rumbo y el sentido de la reforma neoliberal.

El Banco Mundial, se convierte en uno de los actores políticos más importantes en esta coyuntura. Crea discursos movilizadores, como aquel de la pobreza, o aquel de la lucha en contra de la corrupción, crea proyectos específicos que apuntan a neutralizar las capacidades de movilización y gestión política de los actores sociales emergentes, por ejemplo, las mujeres (programa Progenial), los campesinos (programa Prolocal), los

---

\* Puede decirse que el caso de la democracia cristiana que estuvo dos veces en el poder sea una excepción (1981-1984 y 1999-2000), pero la primera vez llegó al gobierno por la vía de la sucesión presidencial.

indígenas (programa Prodepine). El Banco Mundial, asume el rol de diseñador de las políticas públicas desplaza al Estado y al gobierno en la creación de los nuevos marcos institucionales para una reforma jurídica del estado que procese de manera definitiva la reforma neoliberal, por ejemplo el programa projusticia.

También contribuyó a crear una densa red de asistencialismo y clientelismo político a través de los programas de focalización de la pobreza. Su rol político es de primer orden y enmascara su intervencionismo político desde la cooperación al desarrollo y la lucha contra la pobreza.

El Banco Mundial permite que la reforma neoliberal tenga contenidos concretos que luego serán procesados, aprobados y administrados por el sistema político. En ese sentido, el sistema político fue una especie de extensión de las propuestas del Banco Mundial. Pueden citarse, como ejemplos, los compromisos del Banco Mundial para reformas en el sector agrario, en el sector educativo, en el sector salud, en el sector de la infraestructura vial, en la seguridad social, en el sector eléctrico, en el sector financiero, en el sector de los recursos naturales, en el sector del agua y del saneamiento ambiental, etc. En todos estos sectores, el Banco Mundial debilitaba la institucionalidad pública, reforzaba los mecanismos de flexibilización y sobreexplotación laboral, apoyaba la privatización de las políticas públicas, presionaba por la desregulación de los mercados y fortalecía la corrupción y las connivencias entre grupos financieros y manejo del Estado.

Todas estas reformas fueron finalmente procesadas por el sistema político. Sin embargo, al tenor de esas reformas, iba cambiando de manera profunda las relaciones de poder oligárquicas al interior del Ecuador con la conformación y consolidación del actor oculto de la reforma neoliberal, pero a la sazón el más importante y centro de gravedad del nuevo modelo neoliberal: los grupos financieros. En la variable geometría del poder, los grupos financieros son los que toman la posta de los caciques de las haciendas agroexportadoras y las tradicionales oligarquías, y confieren una racionalidad diferente a la acumulación del capital, a la política y al sistema político.

No se puede entender al sistema político ecuatoriano sin entender a los grupos financieros. Remitirse a su lógica, a sus requerimientos, a sus disputas, es comprender el sentido de la política y la episteme del neoliberalismo. La economía política reconoce a los grupos financieros como el proceso de convergencia entre el control monopólico de las industrias, el comercio y la banca, por una sola estructura de poder que define, controla y administra varios monopolios integrados por la estructura jurídica de propiedad.

Lo que diferencia a los grupos financieros del Ecuador, de aquellos definidos por la economía política clásica, es el uso patrimonial y corporativo del Estado por parte de los grupos financieros. Mientras que en términos clásicos los grupos financieros se constituyen a través de la concentración y centralización del capital, administrando los mercados de manera colusoria, en el Ecuador se constituyen desde una matriz estatal. De ahí que para entender la lógica de poder de los grupos financieros sea necesario también comprender su relacionamiento con el Estado.

En efecto, por ejemplo, para entender la sucretización de la deuda externa ecuatoriana de 1982-1983, hay que comprender la dinámica de los grupos financieros de esa época,

en especial del grupo PROINCO, o el grupo MORISAENZ, o el grupo NOBOA-NARANJO. De la misma manera, para comprender la crisis financiera y monetaria de 1999-2000, hay que referirse de manera obligatoria a los grupos financieros, como por ejemplo el grupo ISAIAS, el grupo MASPONS-BIGAS, etc.

### **Los grupos financieros y el modelo neoliberal**

Durante la década de los ochenta se van consolidando y configurando una serie de grupos financieros que controlan posiciones monopólicas de mercado y que disputan al mismo tiempo posiciones de poder en el Estado. Las políticas de ajuste reducen el ámbito de la intervención del Estado y al mismo tiempo amplían las posibilidades del sector privado, desregulando precios, controles, impuestos, seguridad social, leyes laborales, etc. Gracias a este proceso de desregulación, los nuevos grupos financieros pueden consolidar y ampliar su poder en el mercado interno.

Son las políticas de ajuste del FMI las que permiten la constitución de estos grupos financieros como los nuevos núcleos desde los cuales se tomarán las principales decisiones económicas para el conjunto de la sociedad. El poder que pierden los estados gracias a las políticas neoliberales lo ganan los grupos financieros.

Pero se trata de grupos financieros vinculados siempre, de una u otra manera, al Estado; por cuanto ha sido desde el Estado que se generan los marcos jurídicos y la orientación de recursos al sector privado. En el Ecuador, Estado y mercado han sido una sola realidad para la acumulación del capital de los grupos financieros.

De ahí que para estos grupos financieros el acceso al control del Estado constituya una de sus tareas fundamentales para su propia consolidación y para sus planes de expansión. Sin embargo, para acceder al Estado era necesario pasar por las aduanas del sistema político. En virtud de que el sistema político se había transformado desde el proceso de “reestructuración jurídica del Estado” de 1978-79, cambiando la composición de las tradicionales élites por nuevas élites políticas, los grupos financieros pudieron incorporar a miembros de esas nuevas élites políticas como parte de su estrategia de consolidación empresarial y financiera.

Es por ello que en la década de los ochenta, los nuevos partidos políticos se convierten en objetivos de asimilación a la lógica de los grupos financieros. De allí tenemos que las familias de origen libanés y vinculadas a la producción textil, de plásticos, a la agroexportación, a la hotelería y turismo, a las industrias de medios de comunicación masivos, entre otros sectores, convergen estratégicamente hacia el Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE, heredero directo de lo que fue el partido CFP.

Las familias más tradicionales de la ciudad de Guayaquil, vinculadas a la agroexportación, a los negocios petroleros, a la comercialización masiva de productos, entre otros, en cambio, convergen hacia el Partido Social Cristiano. En la serranía ecuatoriana, los procesos de industrialización apoyados desde el Estado generaron importantes núcleos empresariales que fueron luego centralizados en grupos financieros, uno de los más importantes es el denominado en la década de los ochenta como grupo financiero Proinco (o también grupo Paz), que convergió hacia la Democracia Cristiana; en el caso de la socialdemocracia, se presentan también algunos banqueros y representantes del ámbito de las finanzas como importantes cuadros políticos.

La presión de estos grupos financieros por liberalizar la economía eliminando las regulaciones estatales armonizaba con las propuestas de ajuste estructural del FMI, de ahí que a lo largo de la década de los ochenta y los noventa, haya existido una especie de continuidad en el manejo de la política económica independientemente del régimen político imperante. Se puede constatar, por ejemplo, cómo en el gobierno del PSC (1984-1988), la política económica haya estado estrechamente vinculada con el FMI, y que al igual que su sucesor, quien aparentemente estaba al otro lado del espectro político, Rodrigo Borja, en su gobierno (1988-1992), las políticas de ajuste macroeconómico se haya consolidando sobre todo en el ámbito laboral. En efecto, durante el gobierno de la socialdemocracia, fue evidente la participación de miembros del grupo financiero Proinco en el manejo económico, que significó la aprobación de la Ley de Maquilas, entre otras.

### **Crisis financiera y nuevo mapa del poder**

La radicalización del modelo de liberalización económica se produce en el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996). Durante este gobierno, y con el apoyo de la mayoría de partidos políticos, el Congreso Ecuatoriano aprueba la Ley de Modernización del Estado, que contempla una política de desinstitucionalización y privatización total del Estado. Una de las leyes más importantes, por sus repercusiones ulteriores, que se aprobó en ese gobierno fue la Ley de Instituciones del Sector Financiero, que desreguló el control bancario y financiero y que otorgó validez institucional y jurídica a los grupos financieros. Una vez aprobada esta ley y en apenas pocos años se multiplican los bancos y sociedades financieras, de un promedio de 25 bancos nacionales que existían antes de la ley a más de ochenta en apenas tres años.

La liberalización financiera aprobada por el gobierno de Durán Ballén significaba el anuncio de partida de una competencia de los grupos financieros por apoderarse de la producción nacional desde el control del Estado. Política y economía convergen en un contexto de privatización y liberalización económica, auspiciada por el FMI y el Banco Mundial. Una vez aprobada la Ley de Modernización que posibilita las privatizaciones, los grupos financieros pugnan por entrar en este proceso en condiciones ventajosas, y muchos de ellos llegan a acuerdos con empresas transnacionales para consolidar sus posiciones de negociación interna.

Al mismo tiempo, la segmentación del mercado en función de las empresas manejadas por grupos financieros concentra las principales ramas productivas en monopolios y holding controlados por estos grupos financieros. Investigaciones de la época nos indican que la mayoría de sectores productivos nacionales están ya en manos de uno o varios grupos financieros.

Estos grupos financieros tratan de consolidar el poder de sus empresas mediante acuerdos colusorios de mercado, o mediante la segmentación de los mercados en beneficio propio, para el efecto, utilizan los recursos que se depositan en sus bancos o sociedades financieras para trasladarlos hacia las empresas de su propiedad con créditos blandos, sin garantías y con amplias facilidades. Esto generó una práctica de vincular los créditos a empresas propias del grupo financiero perjudicando a productores que estaban por fuera del grupo financiero.

Para atraer esos recursos hacia sus empresas, los bancos utilizaban las tasas de interés con el apoyo del FMI y de quienes a su momento ejercían la autoridad económica. Pero el incremento de las tasas de interés producía recesión económica porque castigaba a los productores al encarecer sus créditos, y los obligaban a incrementar sus tasas de rentabilidad interna para compensar a aquellas tasas de interés que los bancos estaban pagando por la colocación de nuevos ahorros.

Se trataba de un proceso que se retroalimentaba generando efectos perversos: un banco aumentaba las tasas de interés para colocación de ahorros, atrayendo recursos frescos que luego los redistribuía en condiciones ventajosas entre las empresas de su propiedad; para evitar perder posiciones en el mercado, otros bancos respondían incrementando nuevamente la tasa de interés, captando de igual manera recursos frescos que procedían a redistribuir a sus propias empresas, y así sucesivamente.

La aprobación de la Ley de Instituciones del Sector Financiero de 1994, no establecía controles a este juego financiero, y, de su parte, el FMI apoyaba la política de incrementar las tasas de interés porque aducía que ese incremento iba a reforzar la capacidad de ahorro del país y por tanto su capacidad de pago de la deuda externa. Al no existir ningún tipo de control, la economía ecuatoriana se convirtió en una economía netamente especulativa. Para 1996 y 1997, las tasas de interés que los bancos pagaban por colocación de ahorros superaban el 50%, e incluso había bancos y sociedades financieras que pagaban hasta un 80% por colocación de ahorros en instrumentos de plazo fijo.

Las empresas vinculadas a los grupos financieros empezaron a tener problemas de pago de créditos por la recesión económica. A pesar de que estas empresas recibían créditos blandos y sin garantías por pertenecer precisamente a un grupo financiero, empezaron a sentir los efectos de la recesión económica provocada por la disminución de los ingresos y las altas tasas de interés, a ello deben añadirse dos fenómenos económicos de carácter exógeno que provocaron una fuerte recesión en el sector productivo: el descenso persistente de los precios del petróleo que implicaron una debilidad fiscal y por tanto una reducción del gasto estatal; y el fenómeno del Niño de 1996 que destruyó infraestructura vial, y perjudicó básicamente a la producción agrícola.

Sin embargo, ni el FMI, ni las autoridades económicas establecieron un mínimo de mecanismos que regulen al sector financiero y que protejan de alguna manera al sector productivo. La economía estaba entrando en un proceso de especulación justo en el momento en el que el sector productivo entraba en recesión. La crisis era, entonces, inevitable. De hecho, la crisis se produce en el año de 1999, en el gobierno de Jamil Mahuad de la Democracia Cristiana.

Desde que se aprueba la desregulación del sistema financiero ecuatoriano la expansión bancaria había enmascarado las distorsiones existentes, pero el número de bancos que quebraron desde la aprobación de esta ley de instituciones financieras, excedía a los promedios históricos. Los grupos financieros tuvieron la percepción de que la crisis estaba por desencadenarse y propusieron el año de 1998 al sistema político la aprobación de una ley de resguardo para sus activos.

Esa ley creó la Agencia de Garantía de Depósitos a fines de ese año, y en virtud de ella se garantizaban los pasivos de los bancos privados con recursos del Estado y sin

lesionar los activos de los grupos financieros. Una vez aprobada esta Ley, los grupos financieros procedieron a desconectar la propiedad del banco o sociedad financiera del conjunto de las empresas e industrias manejadas por el holding. Su intención era la de que al momento de suscitarse una quiebra bancaria, ésta no arrastre al conjunto de empresas del grupo financiero. Una vez que lograron esa desconexión entraron en proceso de quiebras masivas.

### **Dolarización y quiebra bancaria de 1999**

En efecto, en el primer trimestre de 1999, la crisis aparece como un ataque especulativo a la moneda nacional, que presiona a los bancos por mayores recursos en dólares para solventar sus pasivos. Luego del ataque especulativo y cuando el Estado había entregado una parte de sus reservas internacionales a los bancos, al momento el banco más grande del país, el Filanbanco, entra en un proceso de liquidación y quiebra. A este banco se suman otros bancos en el lapso de pocas semanas. El gobierno, para evitar un corrimiento bancario que presione a todo el sistema bancario decreta una suspensión de actividades bancarias, o feriado bancario.

Para sostener a los bancos la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), recibe recursos estatales que se financian por emisión de moneda. El Estado llega a emitir los Bonos de Estabilización Monetaria a una tasa inclusive del 1% diario. Esta emisión monetaria presiona a la inflación y esa presión se traslada al tipo de cambio, que a su vez se traslada a los bancos, de éstos al sector productivo y finalmente al conjunto de la sociedad.

A medida que se incrementa la inflación producida por la necesidad del gobierno de sostener los pasivos de los bancos privados con recursos estatales, la mayoría de actores económicos se desprenden de la moneda nacional y se refugian en los dólares como moneda de reserva de valor. Mientras tanto, los bancos incluso los que habían quebrado habían acumulado una fuerte cantidad de dólares como resultado de su ataque especulativo a la moneda nacional. Esto implicó una fuerte presión sobre el tipo de cambio. En efecto, mientras en enero de 1999 el tipo de cambio entre la moneda nacional y el dólar americano era de 5 mil sucres promedio por cada dólar, para diciembre de ese mismo año el tipo de cambio se había incrementado en más del 350%.

No solo ello, sino que el descenso de los precios del petróleo a su mínimo histórico de 8 dólares por barril de petróleo, acotaron cualquier disponibilidad de recursos incluso para el pago del servicio de la deuda externa que todos los gobiernos, sin excepción, habían considerado como prioritario. El gobierno de Mahuad no tiene otra opción que declararse en moratoria de pagos de los bonos de la deuda que para ese entonces estaban designados en Bonos Brady.

Para salir de la crisis, el FMI propone una radicalización de las medidas de ajuste: una contracción de la capacidad de consumo vía incremento de impuestos indirectos, una reducción radical del gasto público eliminando los subsidios, un incremento de los precios de los combustibles y una flotación libre del tipo de cambio. Empero de ello, las circunstancias políticas impidieron que el gobierno de Mahuad pueda llevar adelante las recomendaciones del FMI; y por tanto, no obtenga los recursos que el FMI había prometido al gobierno. En efecto, tres levantamientos indígenas redujeron el espacio de maniobra política del gobierno de Mahuad, que tuvo que dar marcha atrás en su

programa de ajuste estructural. Estaba claro, entonces, que esta reducción de los espacios políticos provocada por el apareamiento de un nuevo actor político, en este caso el movimiento indígena, restaban la capacidad de maniobra del gobierno y por tanto su capacidad de manejo de la crisis financiera.

El gobierno, habida cuenta que no tenía capacidad política para manejar la crisis bancaria y financiera, opta por transformar esta crisis bancaria y financiera en crisis monetaria, y lo hace con una expansión de la emisión monetaria que liquida el tipo de cambio, genera inflación y reduce la capacidad adquisitiva de la población. Este proceso tiene su culminación a inicios del año 2000 cuando el gobierno decide dolarizar la economía como un recurso de última instancia para sostenerse políticamente. Para entrar a la dolarización se decreta una macrodevaluación. En enero de 1999 la cotización del dólar estaba en alrededor de 6 mil sucres, para entrar a la dolarización se incrementó ese valor en 25 mil sucres por cada dólar y con esa equivalencia se entró al esquema de dolarización. En el mes de enero del año 2000, un levantamiento indígena decide la suerte del gobierno. Mahuad es destituido por el Congreso Nacional por abandono del cargo.

La crisis financiera y monetaria de 1999-2000, además provocó un cambio en el centro de gravedad de la economía ecuatoriana. Los bancos que quebraron pertenecían a los grupos financieros de la costa y vinculados a la agroexportación. La crisis financiera significó el fin del grupo Isaías (Filanbanco), el grupo Aspiazu (Banco del Progreso), el grupo Guerrero Farber (Banco La Previsora), el grupo Maspons Bigas (Banco del Pacífico), entre otros, y todos ellos centrados en la provincia de Guayas y la costa ecuatoriana.

La dolarización y la salida de la crisis financiera-monetaria cambiaron la arquitectura del poder financiero en el Ecuador y abrieron el espacio para la emergencia de nuevos grupos económicos, esta vez, sustentados en la sierra y vinculados a la globalización de la economía. Por vez primera desde la constitución de la república en 1830, el poder económico y el poder político coincidían en una sola ciudad: Quito.

En efecto, la ciudad de Quito concentra, por ser la capital de la república, importantes espacios de decisión y maniobra política, y luego de la crisis, se convierte en capital económica. Esto hace que las decisiones políticas que se adopten en la ciudad de Quito se conviertan en decisiones nacionales sin necesidad de consenso y negociación con las estructuras de poder de otras ciudades, en especial, de las elites de Guayaquil.

### **El surgimiento de las clases medias como actores políticos**

Antes de la crisis monetaria y financiera de 1999-2000, el flujo migratorio era marginal. Luego de la crisis se convierte en estructural. Las remesas de emigrantes se incrementan de aproximadamente 800 millones de dólares en el año 1999, a cerca de 3.000 millones en el año 2006. Estas remesas implican una alteración en la relación ingreso-consumo que enmascara la situación real de la economía ecuatoriana y provocan cambios sociales, y uno de ellos será el apareamiento de una fuerte clase media que se vincula a los procesos de dolarización de manera directa.

Sin embargo, la economía ecuatoriana no resuelve con la dolarización sus problemas estructurales sino que los esconde y los posterga. El sector productivo acusa el golpe de

la dolarización y cede las prioridades del desarrollo al comercio y a las finanzas. El sector agropecuario experimenta un estancamiento fuerte. La economía empieza a gravitar en el sector primario exportador en su necesidad de dólares para financiar su circulante. La coyuntura internacional es favorable con el incremento de los precios del petróleo, y el Ecuador posterga todas las tareas de la modernización y el desarrollo para otro momento. La dolarización, por el instante, es financiada gracias a las remesas de emigrantes y al incremento de los precios del petróleo.

La dolarización produce fenómenos perversos: distorsiona el sistema de precios y convierte al sector rural en garante del consumo y la renta de las grandes ciudades gracias a un proceso de intercambio desigual entre el campo y la ciudad. El sector industrial no puede competir con los precios establecidos por la dolarización. Su crisis significa desempleo, que a su vez incrementa la presión por la migración.

Es este panorama de pérdida creciente de oportunidades, de empleos y de ingresos, el que motiva a una reacción de la ciudadanía en contra de la democracia, de la clase política y de los partidos políticos. En las elecciones del año 2002, contra todo pronóstico, la alianza de un grupo de militares jóvenes que se presentan como herederos de las jornadas que destituyeron al ex Presidente Mahuad, conjuntamente con el movimiento indígena, ganan las elecciones con una agenda nacionalista y antiimperialista, y con una propuesta de reactivación económica y equidad social. Su discurso fue siempre en contra de la clase política y en contra del ajuste y reforma estructural del FMI y del Banco Mundial.

Empero de ello, una vez posesionado el nuevo Presidente, Lucio Gutiérrez, nombra como ministro de economía a un representante de los grupos financieros de la sierra, y partidario de la estabilidad y de las políticas de reforma estructural. Este cambio de prioridades hizo que el movimiento indígena dé por terminada su alianza política-electoral y que pase a la oposición al gobierno. De su parte, el gobierno para mantener su estabilidad política decide utilizar toda la estructura del Estado para debilitar al movimiento indígena.

El gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005), que continúa e intenta radicalizar la reforma estructural del Banco Mundial, entra en serios conflictos con el sistema político, que a la postre debilitan su margen de maniobra. Una sui géneris movilización social que se da básicamente en la capital de la república, autodenominada los "Forajidos", genera un nuevo tipo de movilización y protesta popular que obliga al sistema político a destituir a Lucio Gutiérrez, al igual que Mahuad, por abandono del cargo.

Este fenómeno social del "movimiento forajido" marca el acceso a la política de las clases medias quiteñas. Sus distancias con el sistema político proceden del hecho de que sus procesos de diferenciación social no coinciden con las propuestas, dinámicas, discursos y estrategias del sistema político.

Las clases medias han rebasado a ese sistema político. Lo constatan como un sistema anacrónico. Las clases medias no se reconocen en partidos políticos como el Partido Social Cristiano, cuya base electoral está en el subproletariado urbano de Guayaquil, o en el Partido Roldosista, que disputa la misma base electoral al PSC. Sus afinidades están cerca de la democracia cristiana, pero no pueden perdonarle a la democracia

cristiana la crisis financiera de 1999 y su evidente colusión con la banca y la finanza. Tampoco adscriben al partido Izquierda Democrática, que tiene sus bases en sectores de clase media baja y que luchan por mayor ascenso social. Tampoco se reconocen en los partidos políticos de izquierda, y menos aún en el partido indígena Pachakutik.

Estas clases medias demostraron su capacidad de movilización durante el gobierno de Lucio Gutiérrez y cuando logran la destitución de Gutiérrez adquieren proyección y conciencia de su rol político. El espacio que las convoca y converge es aquel de la crítica desde la moral al sistema político.

Como son un sector que ha surgido al calor de la dolarización y de la crisis financiera de 1999-2000, su mayor anhelo es la estabilidad. Acusan a la falta de ética y moral al sistema político y al sistema de partidos las recurrentes crisis institucionales. Se trata de sectores con capacidad de demanda económica y que se insertan al mercado en un proceso de recuperación económica.

La dolarización de la economía es su base de sustentación y desde la cual se producen los procesos de diferenciación social que le son inherentes. Estas clases medias son el correlato de aquel proceso en virtud del cual los grupos financieros de la costa ecuatoriana perdieron su peso estratégico en la crisis de 1999-2000. La quiebra de los bancos de la ciudad de Guayaquil y de la costa ecuatoriana, significó el fortalecimiento de los grupos financieros de la sierra. Es a la sombra de esos grupos y de las nuevas élites de poder, que se cobija este proceso de diferenciación social que producen estas clases medias.

Pero este proceso de diferenciación económica se convierte en proceso político. Las clases medias acusan al sistema político de generar inestabilidad en virtud de su falta absoluta de ética en el manejo de lo público. No significa que las clases medias hagan una crítica de los mecanismos patrimoniales, clientelares y corporativos de la política, que son característicos de los grupos financieros ecuatorianos, no llegan a tanto. Tampoco critican al modelo económico neoliberal como un mecanismo que altera las relaciones de manera radical entre el trabajo y el capital. Su crítica siempre y en todo momento está permeada por la moralización de la política y por las demandas de estabilidad.

Si critican a los partidos políticos, y si se movilizaron políticamente en contra de Lucio Gutiérrez, fue en función de su anhelo de garantizar la estabilidad que les otorga la dolarización y el mantenimiento de las relaciones de poder que les permiten crecer a la sombra de los nuevos grupos financieros.

Son estos sectores los que le dan sustento y proyección a algo que en el Ecuador era más un discurso legitimante que una realidad: el discurso de la ciudadanía. Las clases medias logran la transición a la política justamente cuando identifican sus demandas particulares como demandas ciudadanas.

Estas clases medias tienen un locus específico que es la ciudad de Quito. Una ciudad que concentra poder político y económico. Las decisiones políticas que se toman en esta ciudad se convierten en decisiones nacionales. El discurso de la ciudadanía copa los espacios mediáticos y altera los discursos del sistema político. En efecto, en las

elecciones del año 2006, el discurso electoral de los partidos políticos está en desfase con este sector emergente.

De ahí que los dos finalistas electorales de 2006, Alvaro Noboa y Rafael Correa, expresen las dos realidades más importantes del Ecuador: la profunda pobreza e iniquidad provocadas por el modelo neoliberal, y que se tradujo en el apoyo electoral a las propuestas mesiánicas del magnate bananero Alvaro Noboa, y, al otro lado del espectro político, la radicalidad de la moralización del sistema político de las emergentes clases medias, que apoyaron a Rafael Correa. Curiosamente, ambos candidatos se declararon antipolíticos. El primero acudía a responder las necesidades de vastos sectores de la población que ven en la dolarización una amenaza, mientras que el segundo los instaba a la moralización total de la política.

Estas elecciones demostraron las profundas grietas que atraviesan al Ecuador y la pérdida de horizontes reales al largo plazo. Porque el hecho de que haya ganado la segunda vuelta electoral el candidato Rafael Correa, no se debió a un cambio en la percepción de los ecuatorianos de la moralización del sistema político, sino a un cambio de estrategia del candidato Correa que asumió el discurso de su oponente.

Pero este candidato, que logró el apoyo de las clases medias con un discurso radical de moralización de la política a través de una Asamblea Constituyente, una vez electo, asume un principio de realidad y sabe que en su disputa con el sistema político tendrá que provocar una permanente fuga hacia delante. En efecto, se trata de una coyuntura especial porque el gobierno que triunfa en las urnas no tiene un solo diputado, habida cuenta de su decisión de no presentar listas electorales para diputados porque consideraba que el Congreso Nacional era una institución desprestigiada y que representaba los intereses de la “partidocracia”.

La sintonía del presidente electo con las clases medias es total. Si es necesario cambiar el modelo económico neoliberal, según la lógica de la clase media emergente, no es tanto porque este modelo ha cambiado las relaciones de poder en función del capital financiero, sino porque ha provocado pobreza y ha destruido los vínculos familiares por la migración. Si es necesario cambiar al sistema político, no es tanto porque este sistema procesó la reforma neoliberal, sino por su corrupción y su falta de ética.

Se trata de un discurso que provoca un vaciamiento de los contenidos políticos de los discursos de los sujetos políticos que se opusieron y se movilaron en contra del neoliberalismo, como los obreros y los indígenas, pero que, en cambio, es altamente funcional y receptivo para las clases medias.

Es un discurso que tamiza desde la moralización a la política y desde ahí provoca adhesiones instantáneas y al mismo tiempo permite trazar una línea entre amigos y enemigos. La democracia se fetichiza y se convierte en un objeto político en sí mismo. Es decir, cuando la clase media moraliza a la política, convierte a la democracia en un deber-ser desligado del contexto de correlaciones de fuerza y de poder de la cual es parte; así, al convertirla en objeto se la despolitiza y al hacerlo se entrega un valioso territorio al poder.

Para las clases medias emergentes, la democracia como objeto en sí mismo, se constituye en una especie de limbo político en el cual se resolverían por sí solos los

problemas de clase y de discriminación. Para superar al modelo neoliberal, y siempre según la lógica de la clase media, haría falta más democracia. Pero en el fondo esa democracia que se demanda y que se exige, no es más que pura representación electoral. Incluso aquellas demandas de “democracia radical” no pueden superar el formato epistemológico del liberalismo.

La clase media que reclama democracia no ha problematizado el concepto de democracia, porque no tiene posibilidades históricas de superar los contenidos de la democracia liberal. En otras palabras, mientras que los obreros podían superar el discurso y la práctica de la democracia liberal con su propuesta emancipatoria del trabajo y del socialismo, y los movimientos indígenas podían ver a la democracia liberal como su enemigo, las clases medias se sienten cómodas al interior de este concepto porque su realidad como consumidores y como sujetos individualistas y altamente racionales en función de las preferencias del consumidor y los mercados competitivos y eficientes, está justamente condicionada por los límites del liberalismo.

Sus demandas de más democracia son demandas liberales. Es como tratar de superar el control de los grupos financieros sobre la economía pidiendo más mercado. Decir “más democracia”, tiene tanto sentido como pedir “más mercados”. Las clases medias, no pueden superarse históricamente. La fetichización del concepto de democracia es correlativa a su deseo de fetichizar las condiciones de posibilidad como clase.

De ahí su adscripción a la estabilidad como un operador político desde el cual posicionarse en los nuevos escenarios. De la misma forma por la cual la clase media congeló el concepto de democracia, lo descontextualizó de las relaciones de poder, y finalmente lo despolitizó convirtiéndolo en un objeto de discurso y estrategia, también lo hizo consigo misma cuando se auto identifica como “movimiento ciudadano”. Esta categoría de movimiento ciudadano a la cual apelan las clases medias, le permite crear un espacio aséptico en la política, y que es correlativo a su visión moralista del mundo.

Es decir, la clase media se fetichiza políticamente en sus formas de hacer política a través del concepto de ciudadanía porque no quiere asumir los contenidos de poder que implica toda participación política. Las clases medias no quieren arrebatar el poder a los grupos financieros. No quieren una sociedad socialista ni un Estado Plurinacional. Con un sistema político despolitizado están más que contentas de haber cumplido su rol histórico.

Por ello, la ciudadanía es otro concepto congelado en las posibilidades críticas y radicales de la política, por decirlo de alguna manera. La ciudadanía es otro deber-ser universalista que se legitima por sí misma y que no implica problematizaciones demasiado complejas.

Pero al estar por fuera de las relaciones de poder, la ciudadanía se convierte más en maquillaje de una forma de participación política en un determinado contexto electoral, que legitima las relaciones de poder de los grupos financieros y del modelo liberal, que en un cambio de esas relaciones de poder.

La apelación y la adscripción a la ciudadanía como identificador político de las clases medias da cuenta de los límites de su discurso, y de sus posibilidades históricas. La ciudadanía que la clase media reclama a un nivel epistémico es el correlato de la figura

del consumidor. La clase media quiere sentirse tan ciudadana de la misma manera en la que se ve a sí misma como consumidora. Como consumidor, el ciudadano sabe que puede maximizar sus preferencias individuales en un juego libre de opciones al que identifica como mercado. Como ciudadano, el consumidor sabe que puede maximizar sus posibilidades políticas en un juego de libertad de elección.

Se trata de una percepción del mundo que es consustancial a las clases medias en esta hora que sienten el llamado de la historia. No son parte de las elites del poder, y tampoco son parte de los sectores más pobres y discriminados de la sociedad. Pero ahora, a diferencia de otros contextos, reclaman poder político y nociones de sentido desde sus propias particularidades.

Es esta clase media, surgida al calor de la dolarización de la economía, las remesas de emigrantes, el modelo neoliberal, la que sustenta al gobierno de Alianza País, y la que demanda la nueva Asamblea Constituyente. En esa demanda de Asamblea Constituyente, las clases medias hacen tabula rasa de los procesos de movilización y resistencia social y quieren convertirse en momentos fundacionales.

Para estas clases medias, la Asamblea Constituyente puede ser el espacio ideal para, al fin, moralizar al sistema político, aunque las relaciones de poder oligárquicas de los grupos financieros permanezcan luego de la Asamblea, intactas.

La Asamblea Constituyente se convierte en otro fetiche de las clases medias, de la misma forma que se fetichizó a la democracia y a la ciudadanía. Para fetichizar este espacio de resolución política la clase media pasa por anular la herencia de resistencias sobre las cuales sustentó sus propuestas electorales.

Anular el pasado es su condición de perpetuar el presente. Solo anulando el pasado puede pensarse en una estabilidad que se prolongue en el largo plazo. Anular el pasado es romper amarras con la clase obrera y con el movimiento indígena. En la coyuntura de la Asamblea Constituyente, las demandas de los obreros y de los indígenas, sobran.

Puede ser que se conviertan en aliados estratégicos a la hora de moralizar al sistema político, pero los contenidos de sus propuestas políticas rebasan el marco del liberalismo en el cual se sienten muy cómodas las clases medias, de ahí la indiferencia de esta clase media hacia los obreros y hacia los indígenas.

*Quieta non movere*, lo que está tranquilo no hay que desestabilizarlo, parece ser la divisa de la clase media: no mover la dolarización, no mover la estabilidad macroeconómica, no mover las relaciones de poder. Para ello hay que congelar el presente histórico. Y el discurso de la moral es uno de los discursos que contribuyen a que todo se mueva pero nada cambie.

La Asamblea Constituyente nace con el estigma de sus propios creadores: las clases medias. Una Asamblea en la que todo se mueve pero que en el fondo nada se cambiará. Sin embargo, hay un hecho político que es necesario establecer, y es que mientras para las clases medias la Asamblea Constituyente es la posibilidad de moralizar al sistema político y apostar a la estabilidad, para el gobierno de Alianza País es un recurso de sobrevivencia política.

Alianza País necesita de la Asamblea para recomponer sus posibilidades de poder a mediano y largo plazo. En virtud de su estrategia electoral de no presentar candidatos a diputados, Alianza País no tiene otro camino que la fuga hacia delante, y la Asamblea Constituyente es el espacio para ello.

Afortunadamente para Alianza País, el sistema político está agonizando, de ahí que no tenga interlocutores, porque sus interlocutores y contradictores están en un espacio que políticamente ha sido superado. La Asamblea Constituyente, para el gobierno de Alianza País, es el espacio de disputa con ese sistema político. En ese sentido, el gobierno de Alianza País, tiene las mejores opciones para imponer condiciones y asegurarse una hegemonía en la Asamblea Constituyente.

Pero hay otro aspecto en la Asamblea Constituyente y es que a pesar de la intención de las clases medias de convertir a la Asamblea en un espacio neutro de la política, y que tenga por objetivo modernizar al Estado y moralizar a la política, se está creando un espacio político que puede desestabilizar el poder oligárquico de los grupos financieros. Se trata de aquellas paradojas de las que alguna vez escribía con respecto al Ecuador, Leopoldo Benítez. En efecto, drama y paradoja parecen ser las coordenadas en las que la próxima Asamblea Constituyente refunde, una vez más, al Ecuador.